

**REPÚBLICA DE COLOMBIA****RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL****Medellín, cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MANUEL SALVADOR GAVIRIA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. (Rad. No. 05001-31-05-017-2018-00785-01). Se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

**ANTECEDENTES:**

Pretende el demandante se condene a la parte demandada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el 22 de septiembre de 2017 o, en su defecto, desde la fecha en que se obtuvo el capital acumulado en su cuenta de ahorros que le permita obtener la pensión mensual, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales (fl. 90).

Las anteriores súplicas las fundamenta así: cotizó desde junio del año 1980 hasta marzo de 1994 en el Instituto de Seguros Sociales un total de 28.57 semanas; ha cotizado a partir del 1° de julio de 1994 en Porvenir S.A.; el 6 de abril de 2018, elevó solicitud ante la demandada para el reconocimiento de la pensión de vejez, sin que le fuera resuelta (fl. 1).

Porvenir S.A. atendió de manera oportuna el libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Negó los hechos. Como excepciones formuló las de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción y coexistencia de regímenes pensionales

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos adujo que no le constaban. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de obligación para la Oficina de Bonos Pensionales de reconocer la garantía de pensión mínima de vejez ante la falta de agotamiento del trámite por parte de la AFP Porvenir S.A., inexistencia del derecho a bono pensional por incumplimiento de requisitos enlistados en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, ausencia de historia laboral e inaplicación del régimen de transición al actor por afiliación al RAIS.

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 7 de mayo de 2020, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor Manuel Salvador Gaviria. No impuso costas en la instancia.

La Sala conoce del asunto por el grado de la consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

#### **CONSIDERACIONES:**

No es tema de reparo dentro del proceso que el señor MANUEL SALVADOR GAVIRIA LÓPEZ nació en el mes de septiembre de 1957, y que se encuentra

afiliado a PORVENIR S.A. Tampoco se discute que alcanzó a cotizar en el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones-, un total de 28 semanas.

Se circunscribe el presente debate a esclarecer si al actor le asiste el derecho a la pensión de vejez que reclama, bien porque tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual el capital necesario para financiar la pensión ora porque reúne los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, y de ser ello así, a partir de qué fecha se debe reconocer.

Para desechar las pretensiones formuladas por la parte actora, la *a quo*, entre otros argumentos, señaló que el demandante claramente no reunía los requisitos exigidos por la norma para acceder al derecho pretendido.

Lo primero por decir es que el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, indica los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Textualmente refiere:

*“Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.*

*Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.”*

Del anterior texto normativo se desprende que el elemento fundamental para acceder a una pensión de vejez en dicho régimen, por parte de un afiliado, es

tener acumulado en su cuenta de ahorro individual un capital suficiente en los términos allí dispuestos.

Sobre este asunto, la sociedad demandada certificó que para poder acceder a dicha prestación para el año 2020 se requería de un capital acumulado de poco más de \$279.000.000, como lo refiere la Juez de instancia en la sustentación de su fallo, y siendo que el demandante tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual poco más de \$83.000.000 para mayo de esa anualidad, tal saldo a todas luces resulta insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos dispuestos por la ley, por lo que habrá lugar a confirmar la sentencia sobre este aspecto.

Ahora bien, las exigencias que debe cumplir un afiliado para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez son la contenidas en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que a la letra dice:

*“Garantía de pensión mínima de vejez. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión” (subrayas fuera del texto).*

Norma esta que fue reglamentada por el artículo 4° del Decreto 832 de 1996, en el que se dijo:

*“Reconocimiento de la garantía de pensión mínima.*

*Corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los*

*trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.*

*Con anterioridad al envío de la información respectiva, ésta deberá ser verificada por parte de la AFP de acuerdo con las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia Bancaria.*

*En desarrollo de la obligación de velar por la eficiente prestación del servicio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señalará los lugares y plazos para la entrega de los documentos necesarios para acreditar el derecho a la garantía de pensión mínima”*

Nótese como del contenido normativo del referido artículo 65 se desprende que dicha prestación resulta ser excluyente, esto es, aplica solo en aquellos casos en que el afiliado no cumple con los requisitos para obtener la pensión de vejez por parte de la AFP, pues en tal evento, es el Gobierno Nacional quien entra a solventar con el capital faltante la prestación.

Debe anotarse que el artículo 84 de la Ley 100 de 1993 fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 del año 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “*Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad*”, publicada en el Diario Oficial No. 50.964 del 25 de mayo de 2019.

En este sentido, queda derogado igualmente el artículo 3 del Decreto 832 de 1996 que reglamentaba lo concerniente a la “*Excepción a la garantía de pensión mínima*” y, en tal sentido, la exigencia que traía consigo dicha norma pierde vigencia.

Ahora bien, analizadas las probanzas obrantes al interior del plenario, se evidencia que el demandante cumplió los 62 años en el mes de septiembre del año 2019, y que alcanzó cotizar en toda su vida laboral un total de 1.051 semanas, densidad inferior a las 1.150 exigidas por la norma, dando al traste con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima.

En razón a lo anterior, la decisión de primer grado se habrá de confirmar en su integridad. Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.

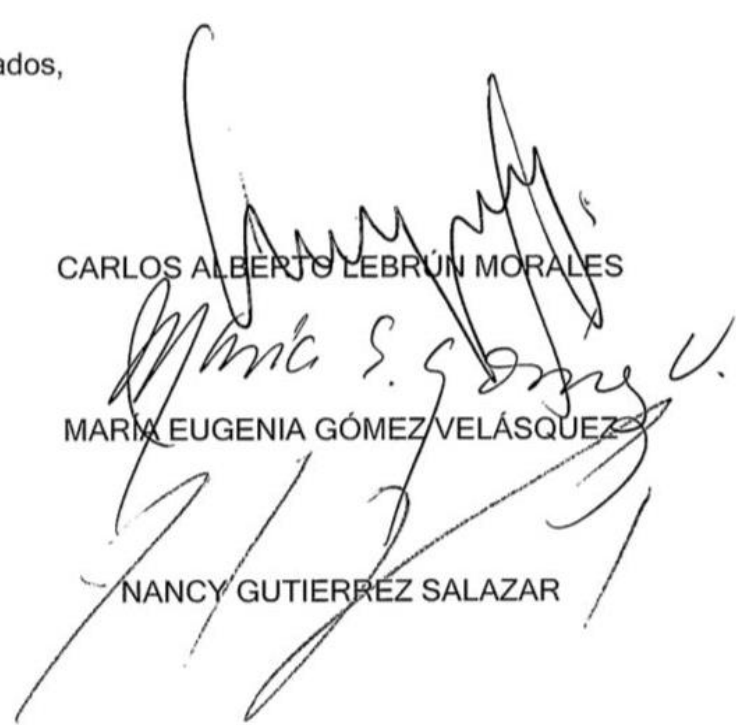
**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia venida en consulta.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 98 fijados el 8 de junio de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

\_\_\_\_\_  
El secretario.